

Santiago, once de mayo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que el abogado don Juan Carlos Manríquez Rosales, en representación de la parte reclamante Agencia de Cabotaje y Exportación Eduardo Sepúlveda Jara, dedujo recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso que confirmó el fallo de primer grado que rechazó el reclamo deducido contra el Servicio Nacional de Aduanas, contenida en la Resolución Exenta 2056, del 30 de abril de 2019, por la que dispone negar autorización para la modificación de la escritura pública de constitución de la Agencia de Cabotaje y Exportación Eduardo Sepúlveda Jara y Cía. Ltda. y ordena proceso de invalidación de la Resol. Ex. 4398, de la misma Aduana, que había autorizado a don Eduardo Sepúlveda Gallegos para continuar a cargo de la Agencia que representa hasta 60 días después de haberse designado nuevos agentes de aduana, en el segundo concurso público, a consecuencia del fallecimiento de don Eduardo Sepúlveda Jara (padre del actual representante de la recurrente).

Segundo: Que, en la pretensión invalidatoria formal, se invocó la causal N° 5 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en relación a lo dispuesto en el artículo 170 del mismo cuerpo legal, al no pronunciarse ni hacer consideraciones respecto a la Resolución 4398 del Servicio Nacional de Aduanas, ya referida.

Tercero: Que el artículo 768 inciso segundo del Código de Enjuiciamiento en lo Civil dispone que “En los negocios a que se refiere el inciso segundo del artículo 766 sólo podrá fundarse el recurso de casación en la forma en alguna de las causales indicadas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de este artículo y



también en el número 5º cuando se haya omitido en la sentencia la decisión del asunto controvertido”. El artículo 766, por su parte, alude a “las sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales”.

Cuarto: Que al tenor de lo expuesto precedentemente y siendo este un juicio regido por ley especial, y sometido al conocimiento de un tribunal especial, no resulta admisible la interposición del recurso de nulidad formal por la causal invocada, lo que lleva a que el arbitrio intentado no pueda ser acogido a tramitación.

II.- En cuanto al recurso de casación en el fondo:

Quinto: Que por el libelo de fondo se denuncia infracción a las normas que regulan la valoración de la prueba conforme a la sana crítica, y específicamente, estimando que no se ha ponderado adecuadamente un determinado documento.

Señala que la sentencia de segundo grado ha incurrido en tal infracción al aplicar erróneamente las reglas reguladoras de la prueba, derechamente dando valor de prueba a la Resolución Exenta 4398 de la Aduana que permite el desempeño de funciones de su mandante, para negarlas, o sea, apreciando como acto administrativo válido y fundado, a una expresión de voluntad de la administración que excede los términos temporales y las causales expresas de la invalidación, y excediendo así los límites de la sana crítica al ser un sistema basado en la lógica, en las máximas de la experiencia y el conocimiento científicamente afianzado, lo que implica que la prueba debe pasar por un proceso de razonamiento y ser debidamente considerado para darle su correcto valor, inclusive su validez formal y sustancial, y la macicez de sus basamentos, en confrontación con el derecho positivo vigente, conforme a los arts. 6 y 7 de la Carta Fundamental.



Por lo que considera que la Corte debió haber revocado la sentencia de primera instancia, acogido el reclamo presentado por esa parte y en definitiva haber ordenado dejar sin efecto la Resolución Exenta 2056, del 30 de abril de 2019, por ser nula, y exceder los límites y presupuestos de la invalidación de oficio.

Sexto: Que sin perjuicio que pudiese ser cuestionable que el recurso cumpla con los requisitos del artículo 772 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que de una atenta lectura del fallo objeto del arbitrio que confirma el de primera instancia, no es posible vislumbrar que se hubiese incurrido por los jueces del grado en los errores de derecho que denuncia el recurrente.

En primer término la sentencia de primera instancia confirmada íntegramente por la de segunda, salvo por las costas, señala en su motivo vigésimo tercero que *“...el artículo 2º transitorio del Decreto con Fuerza de Ley N°30 del año 2004, vigente a la fecha de la solicitud del reclamante, mantuvo lo dispuesto en el ya señalado artículo 3º transitorio del Decreto Ley 743/1974, al indicar que los Agentes de Cabotaje y Exportación designados al 11 de noviembre de 1974, continuarán desempeñando sus funciones hasta la extinción legal de sus nombramientos, y les serán aplicables, en lo que corresponda, todas las disposiciones relativas a los Agentes de Aduana”, y luego añade en el considerando vigésimo cuarto que “...el nombramiento del Agente de Cabotaje y Exportación don Eduardo Sepúlveda Jara, se extinguió con su fallecimiento, esto es, a contar del día 16.09.2018, sin que exista posibilidad alguna de que se continúe actuando al amparo de la agencia a la que pertenecía y, en definitiva, no siendo titulares sus sucesores del derecho a desarrollar dichas actividades propias del rubro, considerando que el sentido del legislador al emitir el Decreto Ley N°743, fue precisamente poner fin a estas Agencias, no resultando, en*



consecuencia, aplicable lo dispuesto en el inciso final del artículo 204 de la Ordenanza de Aduanas, normativa establecida para los Agentes de Aduanas y no los Agentes de Cabotaje y Exportación, que como ya se indicó fueron derogados a contar del DFL 743/1974, sin perjuicio de que excepcionalmente el legislador permitió que siguieran funcionando dichas agencias vigentes a esa fecha, pero solo hasta “la extinción legal de sus nombramientos”. Igualmente, concluye en el basamento vigésimo noveno que *“la reclamada dentro de sus facultades de oficio, ordenó en la resolución reclamada iniciar el procedimiento de invalidación de la Resolución Exenta N°4.398 de fecha 04.10.2018, por no ajustarse a derecho, ajustándose de este modo plenamente a las disposiciones vigentes y no excediendo en ningún caso las facultades concedidas en la ley”.* Y, en los considerandos vigésimo séptimo a vigésimo noveno se hace cargo de la facultad invalidatoria ejercida por la autoridad administrativa, en este caso de oficio.

A contrario de lo que señala el recurrente, y siendo de su cargo acreditar la veracidad de sus aseveraciones, particularmente al indicar reglas de la sana crítica, sin que desarrolle cuáles reglas han sido transgredidas, de qué manera se produce en lo concreto la infracción, a lo que se suma que el tribunal de primer grado ha hecho razonamientos en base a la normativa existente para así aquilatar la prueba que estimó insuficiente para sustentar la postura de la solicitante, llevó a que su reclamación fuese rechazada. De modo que no es posible evidenciar las infracciones de Ley denunciadas, motivos todos que llevan a que el arbitrio intentado sea declarado inadmisibles por manifiesta falta de fundamentos y más todavía si entre los tribunales de instancia sólo ha habido una diferencia en torno a las costas que se entiende no integran la sentencia definitiva.

Y visto además, lo dispuesto en el artículo 781 del Código de Procedimiento Civil, **se declara inadmisibles** el recurso de casación en la forma,



deducido en lo principal del libelo del recurrente en contra de la sentencia de doce de abril de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso; asimismo **se rechaza el recurso de casación en el fondo** deducido en lo principal del mismo escrito, por manifiesta falta de fundamentos.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Rol N° 12.105-2022.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogado Integrante Ricardo Alfredo Abuaud D. Santiago, once de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a once de mayo de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

